

R E S E Ñ A S

ANA CARRIGAN, THE PALACE OF JUSTICE

A Colombian Tragedy (Four Walls Eight Windows, Nueva York, 1993, pp. 303).

El 6 de noviembre de 1985 me encontraba en la Biblioteca Luis Ángel Arango a sólo dos cuadras del Palacio de Justicia que albergaba a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, máximos órganos del Poder Judicial en Colombia. Hacia el mediodía cuando salí de la biblioteca en la calle había gran agitación. Poco después me enteré que un comando del grupo guerrillero M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. Días después, estaba enseñando una clase de historia de Colombia a un grupo de estudiantes de último año de Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Y suponiendo que el historiador -y el académico en general- tiene una responsabilidad que va más allá de enseñar y escribir sobre su campo, me atreví a sugerir a los estudiantes que el gobierno colombiano bien podría haber explorado otras formas que hubieran evitado la masacre de más de cien compatriotas. Me sorprendí ante la reacción de los estudiantes, quienes casi unánimemente justificaron la violencia oficial sin importar el costo. Años más tarde, después de haber enseñado el mismo curso a cientos de estudiantes de primer año, quienes llegaban a la Universidad de los Andes, frescos y receptivos a nuevas ideas, entusiastas por el estudio, muchos de ellos excelentes, me preguntaba cómo las presiones sociales, los valores de la carrera de Administración de Empresas tal como se les enseñaba por parte de algunos profesores, y el ejemplo institucional de un discurso vacío y cínico sobre la ética, podrían eventualmente inducir a algunos de ellos a justificar nuevas masacres.

Este libro escrito por la periodista colombo-irlandesa Ana Carrigan nos ofrece información hasta

ahora inédita. La autora utiliza testimonios judiciales, material fotográfico provisto por los empleados de la morgue, videos inéditos, reportes forenses, minutas de las discusiones del Consejo de Ministros durante los dos días de la crisis, extensas entrevistas, testimonios de soldados y agentes de los servicios de inteligencia, grabaciones de las conversaciones entre los altos mandos militares durante la "operación de rescate", e informes de comisiones investigadoras. La historia que emerge es una muy distinta a la difundida por el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas. Carrigan demuestra que los magistrados, los miembros del comando guerrillero y un elevado número de personas que tuvieron la desgracia de encontrarse en el Palacio de Justicia durante la toma guerrillera fueron masacrados en los incendios provocados por los bombardeos de las Fuerzas Armadas o por las balas oficiales. Murieron en total más de cien personas, además de un número no precisado de "desaparecidos".

Independientemente de la ingenuidad -o demencia- del M-19 en pretender juzgar al gobierno por las violaciones al proceso de paz, Carrigan cuestiona seriamente la versión oficial de que el grupo guerrillero fue pagado por la Mafia para liquidar a los jueces. Al contrario, el sistema judicial colombiano había expuesto las conexiones entre narcotraficantes y altos oficiales de las Fuerzas Armadas. La misma Corte Suprema de Justicia había condenado a varios militares en casos relacionados con la guerra sucia en su versión colombiana.

Carrigan describe como las Fuerzas Armadas actuaron sin mayor tacto ni respeto por las vidas de

las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia. Se concluye de su investigación que la torpe operación militar fue un tributo a la brutalidad y a la ineficiencia. Además, los militares mantuvieron desinformada a la opinión pública durante el operativo. El gabinete civil del Presidente Betancur, con excepción de Parejo González, el Ministro de Justicia, fue incondicional a las acciones militares.

Las Fuerzas Armadas se oponían a cualquier negociación, ya que preferían una solución militar aunque sangrienta. La versión oficial de los hechos fue rápidamente preparada y entregada a la prensa. Esta versión oficial ha permanecido prácticamente intacta. Carrigan revela en las conversaciones de los altos mandos militares un lenguaje empapado de violencia y triunfalismo en medio de la tragedia. Por ejemplo, el General Arias Cabrales reportó a sus superiores que "el personal ha sido totalmente fumigado". Su superior, el Ministro de Defensa, General Vega Uribe, vio la "operación" como "otra página de gloria". Tal y como anota Carrigan, en "defensa de las instituciones" y el "estado de derecho" cualquier tipo de acción militar encuentra justificación en Colombia.

No solamente contribuye Carrigan a esclarecer los hechos del 6 y el 7 de noviembre de 1985, sino que con agudeza revela también el carácter militarista de la élite y de buena parte de la opinión pública colombianas. Según Carrigan la élite colombiana ha querido copiar de los Estados Unidos "el sueño americano" de la prosperidad económica, sin querer imitar los principios de la democracia política y el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos. No es pues accidental, como nos recuerda la autora, que más opositores del *statu quo* han sido asesinados en Colombia en los últimos tres años, que en los dieciséis de la dictadura de Pinochet en Chile. Nuestra indiferencia ante la violencia y los asesinatos, la insistencia de muchos en que "aquí no pasa nada", llevan a la autora a concluir que "en la sociedad de Bogotá... la gente esta todavía frenéticamente absorbida en remendar alianzas nuevas, hilar fantasías nuevas, tejer redes de negación y olvido...."

Eduardo Sáenz Rovner, Ph.D.
Profesor Asociado, Facultad,
de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia